

TRABAJO, DIGNIDAD, DERECHOS

«Hay alternativas a las políticas actuales que requieren de un compromiso colectivo como país para exigir flexibilidad a la UE en el cumplimiento del objetivo de déficit y que pasan también por una reformulación profunda de la política fiscal, más equilibrada, más justa, que permita obtener recursos adicionales para promover la actividad económica...»



Tribuna Sindical

Daniel Bueno Valencia

▶ Secretario General CCOO Región de Murcia

Antonio Jiménez Sánchez

▶ Secretario General UGT Región de Murcia

Mañana, 1 de mayo, expresaremos, sintetizada en las tres palabras que dan título a este artículo, las demandas que los trabajadores y trabajadoras de nuestro país formulamos a los poderes públicos y las políticas que de ellos emanan.

En un escenario de paro insostenible económicamente y cruel desde el punto de vista social, el Gobierno, inactivo para garantizar el derecho al trabajo de la población española, se encomendó con la Reforma Laboral aprobada en febrero a una drástica reducción de derechos, salarios y condiciones de trabajo, poniendo a todos en posición de ser despedidos con el me-

nor coste y las mínimas trabas posibles.

En la cruzada contra el déficit público, los mercados ven protegidos sus intereses a través de la Constitución española, y en la colisión de derechos constitucionales el interés de los mercados prevalece en la acción política respecto a los derechos de la ciudadanía. Los perjudicados son los trabajadores y las trabajadoras, el derecho al trabajo digno y suficiente para afrontar los proyectos vitales, mientras el Gobierno asume que el paro va a seguir creciendo y, paralelamente, deteriora los servicios públicos básicos y derechos sociales.

El camino por el que transitan las sociedades no está predestinado: se forja a través de decisiones, de apuestas, de estrategias, de valores. España había elegido, tras cuarenta años de apogeo democrático, el camino del progreso, de la justicia social, de la igualdad, de la solidaridad. No sin problemas, claro, y con brechas que todavía había que solucionar. Pero el camino que ha emprendido el Gobierno, con las llamadas reformas estructurales y los Presupuestos Generales del Estado para 2012 —y para 2013— es el camino de la renuncia, de la resignación, del crecimiento de la pobreza y la desigualdad, de la rendición ante las exigencias de los mercados, esos que nos introdujeron con su avaricia en la

crisis económica y que ahora pretenden fulminar las conquistas sociales logradas durante el siglo XX.

Hay alternativas a las políticas actuales, alternativas que requieren de un compromiso colectivo como país para exigir flexibilidad a la Unión Europea en el cumplimiento del objetivo de déficit. Que pasan también por una reformulación profunda de la política fiscal, más equilibrada, más justa, que permita obtener recursos adicionales para promover la actividad económica y el crecimiento del empleo, que combata el fraude fiscal en lugar de facilitarlo mediante injustas medidas como la amnistía fiscal. Que permitan afrontar el sostenimiento de los servicios públicos como garantía de la solidaridad y la igualdad, especialmente la sanidad, la educación y la atención a la dependencia.

Como también hay alternativas a la pérdida de derechos que ha supuesto la reforma laboral, que bajo el aparente objetivo de ser más competitivos ha roto el equilibrio en las relaciones laborales a favor de la decisión unilateral de las empresas, favoreciendo el descalce y la inaplicación de los convenios colectivos, favoreciendo el despido como mecanismo de ajuste frente a la situación de crisis, y olvidando que el trabajo, el derecho al trabajo, es el mecanismo fundamental de progreso personal y social de la mayoría de la población.

Todas estas reivindicaciones configuran el carácter de este 1 de mayo de 2012, un paso más en la amplia contestación social que están teniendo las

políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular, tanto en el país como en nuestra Comunidad, una contestación tan necesaria como legítima y justa.

Tenemos la obligación, como ciudadanos, como trabajadores y trabajadoras, de exigir un cambio de rumbo profundo en la política económica, social y laboral que se está emprendiendo. Exigimos rectificación al mismo tiempo que expresamos la necesidad de un

gran acuerdo social y político, de todo el país, para sustentar ese cambio de rumbo, desde el diálogo leal y la corresponsabilidad de la mayoría de la sociedad en el futuro que queremos dibujar.

La huelga general del pasado 29 de marzo puso de relieve un amplio respaldo social a las justas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras, y el Gobierno haría bien en tenerlas en consideración. No se puede gobernar de cara a los mercados y de espaldas a la ciudadanía, es socialmente inaceptable y políticamente cuestionable, pese a la indudable legitimidad de la mayoría parlamentaria del Partido Popular, porque las elecciones generales no son un cheque en blanco para la acción de gobierno, sino que este debe tener siempre en cuenta las demandas sociales.

Trabajo, frente al cruel crecimiento del paro. Dignidad, frente al deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría. Derechos, frente al intento de hacer de todas las personas sólo un número en los balances contables de las empresas.

Trabajo, frente al cruel crecimiento del paro. Dignidad, frente al deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la mayoría. Derechos, frente al intento de hacer de todas las personas sólo un número en los balances contables de las empresas.

Primero de Mayo



Tribuna Libre

Begoña García Retegui

▶ Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional

VALCÁRCEL SE QUEDA SOLO MINTIENDO

La credibilidad del presidente Valcárcel cada vez se tambalea más. La pasada semana, durante su comparecencia en la Asamblea se esmeró en aparentar normalidad, en seguir fingiendo que no ocurre nada, persistiendo en su actitud tosca y prepotente con los grupos de la oposición. Sin embargo, sus mentiras cada vez le ponen más en evidencia a él y a su gestión, algo que no pasa desapercibido para los ciudadanos.

Las propuestas electorales del PP han quedado en meras entelequias y afloran recortes que están amenazando seriamente al Estado del Bienestar, cuyo dismantelamiento es ya sólo cuestión de tiempo con este Gobierno. Valcárcel y el PP han mentido a la ciudadanía. En campaña electoral tocaron otra música y aseguraron que no subirían los impuestos, que no repercutiría en las pensiones y que no recortarían la sanidad, la educación ni las políticas sociales. Justo lo contrario de lo que están haciendo. Son auténticos prestidigitadores de la palabra.

Hace sólo un año, el presidente aseguraba, muy ufano, que no cumpliría los objetivos de déficit si eso significaba no prestar servicios a la ciudadanía. Ahora pretende convencernos de que esos recortes son justos e imprescindibles. Pero la realidad es que esos 'hachazos' son fruto de sus excesos, de su despilfarro. Ni se inmuta.

Todos sabemos que la situación no es fácil ni en la Región ni en España. Pero con los duros recortes que se suceden día tras día, no conseguiremos que se reactive la economía y salir de esta asfixia. Bruselas y el FMI así lo creen también y han recomendado llevar a cabo una política de estímulo de la economía, pues o frenamos esta dinámica de recortes o perderemos en el intento.

Hace sólo un año aseguraba, muy ufano, que no cumpliría los objetivos de déficit si eso significaba no prestar servicios a la ciudadanía. Ahora pretende convencernos de que esos recortes son justos e imprescindibles

El problema es que sus reformas son ideológicas, retrocesos en derechos que hipoteca-

rán nuestro futuro, devolviéndonos a tiempos remotos. Prueba de ello, son los Presupuestos Generales del Estado, que se debaten estos días y consuman un agravio en general, y para la Región en particular. No aportan confianza porque son económicamente ineficaces y socialmente injustos. Pero no importa, Valcárcel y su Gobierno se han vuelto sumisos (han cedido hasta con el Ebro) y se conforman con unos presupuestos raquíticos que merman cuantitativamente las inversiones en nuestra Comunidad.

El PP sigue sin querer molestar a las grandes fortunas, a los que más tienen, prefiere recortar en sanidad, obligándonos al copago en farmacia y en otras prestaciones como el transporte, las prótesis o los complementos dietéticos, además de discriminar a los más débiles. Recorta en educación, sube las tasas en la Universidad, amenaza la continuidad de miles de interinos y merma la calidad. Además de meter la tijera a la dependencia, algo inadmisiblemente.

Durante muchos años hemos advertido que el Gobierno había gastado por encima de sus posibilidades. Pese a todo, no se tomaron medidas que corrigieran esta situación, aumentaran los ingresos y redujeran el gasto improductivo, que abandonaran el derroche. Nuestras propuestas han sido sistemáticamente despreciadas y rechazadas.

Valcárcel no se ha tomado en serio la gestión de la crisis y debe dar la cara ante la ciudadanía, asumir su responsabilidad, ponerse a trabajar y dejar de hacer oposición al Gobierno de Zapatero para justificar su incompetencia e improvisación. Hay alternativas a los recortes para que la economía no siga detenida, para crear empleo, para no hacer pagar a los que menos tienen, para poder salir de esta crisis. Estamos como siempre dispuestos a trabajar por la Región.